

Represión y guerrillas, único diálogo en la política guatemalteca

[Carlos Maria Gutierrez 26 SEP 1980](#)

En la Zona 13 de la ciudad de Guatemala, donde termina la Sexta Avenida, están el Club Hípico y el Mercado de Artesanía, que resumen los violentos contrastes del infortunado país. A un lado de la calle, las indias tejedoras, venidas de sus aldeas con sus faldas multicolores y sus telares; al otro, las elegantes amazonas de la alta burguesía, con sus chaquetas rojas de equitación, que evolucionan en los caballos pura sangre detrás de una alambrada infranqueable.

También sobre la Sexta Avenida, pero en otro extremo de la ciudad, está el palacio Presidencial, que mezcla en su estilo la arquitectura maya y española. El palacio es el *bunker* del régimen militar; concentra los ministerios, el Estado Mayor General y los servicios de Información. Las nobles puertas de madera labrada, todas iguales, que dan a las galerías artesonadas, son en apariencia el único rasgo democrático del Gobierno: en el segundo piso, por ejemplo, la puerta 14, de la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia, es idéntica a la puerta nueve, que dice «Servicio sanitario caballeros». El subsecretario de Relaciones Públicas, es el mayor Rolando Archila, también especialista en contrainsurgencia y de quien se comenta que la CIA impulsa su larga carrera en el cargo. El secretario del ramo es el civil Toledo Vielman, pero cuando se trata de gestionar entrevistas con gobernantes, hay, que pasar por Archila. Como toda dictadura exacerbada, el militarismo de Guatemala practica el método de eludir la realidad circundante y crear otra, propia. Algunos, como el general Angel Aníbal Guevara, ministro de Defensa, se exceden: «Uno de los pocos países donde se respira dentro de un contexto de libertad», dice, «es Guatemala, territorio que ha merecido elogios internacionales». El mayor Archila -corpulento y de modales suaves- trata de ser más discreto, pero a veces se le escapa el estilo paranoide del régimen. Por ejemplo, cuando da su versión del caso de la Embajada española, ocupada en febrero último por campesinos, invadida e incendiada después por la policía. (Todos los que estaban allí murieron, salvo el embajador, Máximo Cajal, y entre las víctimas hubo un ex vicepresidente y un ex canciller guatemaltecos, que habían ido de visita). «El embajador Cajal», afirma Archila sin pestañear, «preparó el incidente. Citó a los visitantes a la misma hora en que los extremistas debían ocupar la Embajada. El lo sabía. Hemos averiguado todo». ¿Pero qué embajador en su sano juicio planea el incendio de, su Embajada? El mayor Archila sonrío: «Es muy claro: el señor Cajal tenía conexiones con la guerrilla. Parece que es comunista». El ministro de Gobernación, Donald Álvarez, explica la muerte de siete estudiantes, el 14 de julio, a manos de las bandas parapoliciales que entraron en el *campus*: «Se estaría dando una purga entre los grupos clandestinos (de izquierda) y de ahí la cantidad de muertos a tiros. Desafortunadamente, la autonomía universitaria impide que la Policía penetre a limpiar el lugar».

Sindicatos y universidad

Las relaciones laborales se han desequilibrado definitivamente después que el Gobierno del general Romeo Lucas García echó el peso de la represión contra los sindicatos y que la guerrilla, en respuesta, acudió en defensa de los trabajadores inermes con golpes selectivos contra el empresariado. Luis F. Iriás, presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, buscado para matarlo, pudo escapar a Costa Rica; otro presidente de la AEU, Oliverio Castañedo, fue cazado y muerto a tiros frente al palacio presidencial. En lo que va de año cayeron asesinados por el Ejército Secreto Anticomunista una decena de profesores y técnicos de la Universidad de San Carlos; los últimos, Rita Navarro, Luis Mendizábal, Roberto Ortiz y Francisco Monroy. En abril, el rector Saúl Osorio debió irse ante la inminencia de un atentado, y su reemplazante, Leonel Carrillo Reeves, renunció en julio. El tercer rector sustituto es Raúl Molina, un ingeniero de 37 años, también condenado a muerte. En las estrelladas de su lenguaje cuidadoso aparecen la inseguridad y la desesperanza que acosan a los civiles:

Pregunta: ¿La represión y las listas de universitarios condenados a muerte han provocado disminución de las inscripciones?

Respuesta. Este año tuvimos, al principio, una inscripción más baja de lo esperado. El índice de deserción en el segundo trimestre será del orden del 10%.

P. ¿Los ataques a la universidad son ahora más frecuentes?

R. La muerte de los siete estudiantes es una etapa dentro del proceso contra la universidad. Primero, los muertos fueron personas del equipo de trabajo del rectorado. Después, los asesinatos se extendieron a quienes tenían participación en la política universitaria. La tercera etapa abarcó a profesionales vinculados desde un punto de vista puramente técnico, sin definición política, como los licenciados

Mendizábal y Navarro o el doctor Ortiz. El ataque del 14 de julio ha rebasado esos límites: ahora cualquiera, por el simple hecho de estar dentro de la Ciudad Universitaria, puede ser asesinado.

P. ¿Qué se sabe de la complicidad del Gobierno con las bandas de extrema derecha?

R. Si contáramos con una sola prueba firme, tendríamos el compromiso de presentarnos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Pero el pueblo afirma que la policía, parte del Ejército y las bandas asesinas constituyen un solo cuerpo. Esa es la voz popular. En el asesinato de Castañedo participaron vehículos con ciertas series de matrícula que pertenecen a la policía.

P. ¿Cómo ve el futuro inmediato?

R. El futuro inmediato es definitivamente negro. En estos momentos parecería firme la actuación del sector represivo, que podría consolidar un régimen de muchísimos años de poder. Toda la sociedad está en crisis; pero una crisis explota siempre de alguna manera, y hay que reconocer que en Guatemala hay un movimiento subversivo; no está en la Universidad, sino en zonas rurales y urbanas, y parece bastante organizado.

Reagan, la esperanza

La guerrilla, declinante a principios de los años setenta, ha recobrado vigor, superado el proceso de divisiones y antagonismos, que ocasionaron en su seno el conflicto chino-soviético, la influencia trotskista y el reformismo de una antigua dirigencia del Partido Comunista guatemalteco. Han surgido otros dos grupos: el Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización Revolucionaria del Pueblo Armado. En mayo, ambos se unificaron militarmente con el nuevo PGT, decidido ahora a la lucha armada, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las acciones guerrilleras son constantes y obligan al Ejército a un esfuerzo desgastador; implantadas en frentes rurales, llegan también a la ciudad en forma de atentados espectaculares, como la ejecución, en julio, del jefe de Policía, Miguel Nazareno.

Con menos posibilidades que en El Salvador, la izquierda guatemalteca ha intentado, por otra parte, la movilización cívica y de masas, cuya iniciativa está en un movimiento sindical tradicionalmente aguerrido. En 1978 se creó el Comité de Unidad Sindical, y ese mismo año, radicalizada por la represión, sindicatos y centrales rompieron con el sindicalismo continental controlado por Estados Unidos: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) se retiró de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, y surgió también el Comité de Unidad Campesina, para atraer a un campesinado organizado hasta entonces en una federación afiliada a la CLAT. El CNUS fue en 1979 factor principal en la creación del Frente Democrático contra la Represión, que reúne a un centenar de organizaciones populares, más el Partido Social Democrático y el Frente Unido de la Revolución (FUR).

También a diferencia de El Salvador, esta oposición civil extraparlamentaria debe desarrollarse en condiciones de una represión tan implacable y antigua que le impide obtener un poder de convocatoria. Ese efecto del terror gubernamental está bien representado por un pequeño aviso periodístico inserto en julio en un diario de la capital: «Los familiares de la señorita Aura Oliva Chacón queremos que quede claro que nuestra pariente en ningún momento ha pertenecido ni pertenece a ningún sindicato y, por el resguardo de su integridad física, solicitamos que por este medio se haga la correspondiente aclaración».

La última posibilidad

Para la oligarquía guatemalteca se trata simplemente de resistir a la espera de que el desenlace electoral estadounidense la favorezca. Si resulta electo presidente Reagan apoyará a Lucas, titula el periódico *Prensa Libre*. La índole del sistema cerrado veda en Guatemala todo tipo de apertura; por allí se colaría un torrente político que puede liquidarlo. Mientras aguarda por el hipotético triunfo de Reagan, el régimen procura un reagrupamiento regional que le sirva de escudo, y gestiona activamente la reconciliación de Honduras y El Salvador (sin relaciones desde 1969). La extrema derecha militar de la región considera una futura alianza de los tres regímenes como un alivio provisorio frente al inquietante ejemplo de Nicaragua.